



Voces del Sur

Órgano de Formación, Capacitación y Divulgación del Partido de la Revolución Democrática de Guerrero

Edición No. 25 - Chilpancingo, Gro., Enero-Marzo de 2022

La revocación debe darse por demanda ciudadana

El PRD no debe
de distraerse con
la revocación de
mandato: Alberto
Catalán



El PRD no debe de distraerse con la revocación de mandato: Alberto Catalán

Chilpancingo, Gro., marzo de 2022.- El PRD no debe de distraerse ante una actividad que no es fundamental para el ejercicio político en el país, sostuvo el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alberto Catalán Bastida, en torno a la consulta sobre la revocación de mandato del presidente de la República, que se llevará a cabo el 10 de abril próximo.

Reconoció que si bien es cierto es una herramienta de consulta, “desafortunadamente está mal planteada”.

En entrevista con *Voces del Sur*, el presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal del PRD en Guerrero advirtió que la consulta es un ejercicio que no tendrá ninguna vinculación con el ejercicio del actual gobierno federal, en este caso del presidente de la República.

Subrayó: “Entonces, desde una óptica crítica, creemos que ésta no es más que una estrategia política que solamente obedece al ego del presidente, es una estrategia mediática que busca fortalecer la imagen del presidente, dado que hasta estos tres años y meses ha te-

nido un desgaste natural por el propio ejercicio del gobierno”.

Recalcó: “Entonces, ya en los albores del final de este sexenio, lo que se intenta es que a través de esta estrategia política, electoral, mediática se busque un reposicionamiento de la figura del presidente”.

E insistió: “Creo que esa es la intención; por lo tanto, el PRD no debería estarse distraiendo en esta actividad cuando tenemos actividades más importantes, como es la reestructuración y el fortalecimiento del partido en el estado y en la República”.

En la conversación en su oficina de la sede estatal perredista, Catalán Bastida habló también de las expectativas de su partido para el 2024 tanto en Guerrero como a escala nacional.

Dijo: “Para 2024, una de las prioridades del PRD estatal debería de ser llegar unificado; todos los grupos políticos en una sola línea política de fortalecer al partido, tratando de generar las mejores candidaturas y si es posible que con prontitud se puedan definir algunas candidaturas para que esto le dé certeza al

equipo político, a los candidatos o candidatas, pero sobre todo a la militancia”.

Agregó: “Esta es una perspectiva del partido: llegar fortalecido, llegar unido, pero sobre todo con una clara visión de quiénes será nuestros representantes en las próximas elecciones en el 2024”.

Para esto, dejó en claro que tiene que haber, tanto a escala estatal, como nacional, la perspectiva de la política de alianzas. “Precisamente, porque necesitamos tener una línea política. Y al ser una elección presidencial, obviamente, tiene que ver con los acuerdos de la dirigencia nacional”, justificó.

También planteó: “El PRD de Guerrero siempre ha pedido que se le respete la posibilidad de generar su propia política de alianzas. Sin embargo, al ir a una elección nacional en donde se elegirá presidente de la República, y también en el estado estaremos eligiendo senadoras y senadores, tenemos que analizar cuál será la política de alianzas a nivel nacional, para tratar de empatarla con los objetivos que nosotros tenemos”.

Añadió que sin duda alguna todo esto está

DIRECTORIO

**DIRECCIÓN EJECUTIVA ESTATAL
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE
GUERRERO**

Alberto Catalán Bastida
PRESIDENTE

Ivet Díaz Bahena
SECRETARÍA GENERAL

MOISÉS ACEVEDO RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS
ELECTORALES Y POLÍTICA DE ALIANZAS

Eleazar Sierra Oropeza
SECRETARIO DE GOBIERNO Y ASUNTOS LEGISLATIVOS

Jesús Guatemala Aguilar
SECRETARIO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y
ORGANIZACIÓN INTERNA

Félix Moreno Peralta
SECRETARIO DE COMUNICACIÓN POLÍTICA

MIRNA GUADALUPE CORIA MEDINA
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DE AGENDAS DE
IGUALDAD DE GÉNERO, DIVERSIDAD SEXUAL,
DERECHOS HUMANOS, DE LAS JUVENTUDES,
EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Bernardo Ortega Jiménez
COORDINADOR DE LA FRACCIÓN DEL PRD

Fernando Sandoval Palacios
SECRETARIO TÉCNICO

MESA DEL CONSEJO

Mario Ruiz Valencia
PRESIDENTE

Marco Antonio Orgániz Ramírez
VICEPRESIDENTE

Erika Isabel Guillén Román
SECRETARÍA

Voces del Sur (año 7, número 25) es una publicación trimestral, editada y distribuida por el Partido de la Revolución Democrática en Guerrero, Av. Miguel Alemán, No. 80, Col Centro, Chilpancingo, Gro. C. P. 39060.
Editor responsable: Félix Moreno Peralta.
Impreso por: Ulises Domínguez Mariano, Nogal No. 56, Fracc. Jacarandas II, Chilpancingo, Gro., C. P. 39097.
Este número se imprimió el 30 de marzo de 2022, con un tiraje de 1000 ejemplares.



a la espera de la definición de esta política de alianzas, porque, anticipó que en torno a eso se empezarán a construir los primeros acuerdos a nivel municipal, estatal y, obviamente, nacional.

-Se ha notado cierta inconformidad en Guerrero con las líneas que ha trazado la dirigencia nacional, si para el 2024 implicara seguir otra vez una línea de alianzas como la de la pasada elección presidencial, ¿ustedes acatarían la línea nacional o mantendrían alguna independencia?

-Yo creo que el desacuerdo no es tanto por la política de alianzas; es más bien por la desatención que ha habido de la dirigencia nacional para con la dirigencia estatal. El que Guerrero sea uno de los estados más perredis-

tas tendría que ser de relevancia para la dirigencia nacional, cosa que no es así. ¿Po qué? Porque en ningún momento se ve un apoyo especial a la dirigencia estatal, a los militantes de Guerrero, a los propios candidatos. Entonces, siendo uno de los estados que más votos le da al PRD al nivel nacional, no puede ser posible que no nos tomen en cuenta para tomar algunas decisiones, o para opinar sobre algunas decisiones.

Sobre este mismo punto, asumió: “Yo creo que en el reciente proceso electoral, la alianza se asumió con todo lo que representaba, sabiendo que podíamos tener algunas consecuencias; sin embargo, así la asumimos. No fue impuesta como tal”.

Prosiguió: “Aquí los dirigentes tomaron la

decisión de que así sería. Pero, bueno, hoy hay un análisis respecto a la alianza con el PAN en el 2018, respecto a la alianza con el PRI en el 2021, y yo creo que eso es lo que tendríamos que analizar, estudiar, y tomar una definición o un posicionamiento como PRD Guerrero, respecto a la política de alianzas que se prevé a nivel nacional, que como sabemos es esta alianza Va por México, en donde está incluido el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional.

Y finalizó: “Yo creo que si nos siguen permitiendo esta opinión, la dirigencia nacional, no tendríamos ningún problema. El punto de conflicto sería si es que en algún momento pretenden imponer algún acuerdo que, obviamente, nosotros no aprobemos”.

La revocación de mandato debe darse por demanda ciudadana

“Se tiene que tener en cuenta que es de los ciudadanos, y solamente ellos, debiesen hacer convocatorias a votar. El hecho de que Morena y el presidente esté promoviendo es que se está tergiversando a propósito el sentido de la revocación de mandato”, explica por su parte el experto en derecho constitucional y catedrático de la UNAM, Francisco Burgoa.

Ramón Sotero

“Habrá una consulta para preguntarle a los mexicanos si continúo en la presidencia o si renuncio, porque, como lo creo y lo he dicho muchas veces, el pueblo pone y el pueblo quita. El pueblo es soberano”, dice el compromiso 82 de los 100 expresados en el zócalo de la capital del país por Andrés Manuel López Obrador tras tomar protesta como presidente de la República.

Prácticamente desde ese momento, mes a mes, López Obrador fue impulsando la organización de la revocación de mandato, en contra del espíritu de la legislación vigente.

“El proceso de revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza”, se lee en el artículo 5 de la Ley Federal de Revocación del Mandato.

Pero la consulta de revocación de mandato a realizarse el próximo 10 de abril no sentará ningún precedente de que el poder dimana en el pueblo, debido a que este ejercicio no está

siendo impulsado por los ciudadanos sino por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena, con una intención más política que democrática: dotar de mayor legitimidad y apoyo al mandatario en sus últimos 30 meses de gobierno, coinciden especialistas.

“Como se está llevando a cabo esté ejercicio no hay ningún aspecto positivo, porque es un mecanismo de participación ciudadana a través del cual se debe canalizar un descontento; sin embargo, su organización no ha sido por una intención genuina de la ciudadanía, sino viene desde los partidos políticos con una finalidad política”, sostiene Arturo Espinosa, fundador de la consultora Estrategia Electoral, consultado por la revista *Expansión política*.

“Se tiene que tener en cuenta que es de los ciudadanos, y solamente ellos, debiesen hacer convocatorias a votar. El hecho de que Morena y el presidente esté promoviendo es que se está tergiversando a propósito el sentido de la revocación de mandato”, explica por su parte el experto en derecho constitucional y catedrático de la UNAM, Francisco Burgoa, al participar en un foro convocado por la revista mencionada.

Fueron ciudadanos impulsados por el pre-

sidente, por Morena, y por organizaciones como “Que Siga la Democracia, AC” y “Que Siga el Presidente AC”, que la consulta de revocación superó su primera prueba: reunir firmas del 3 por ciento de los ciudadanos para que la convocatoria se emitiera.

“El mecanismo de revocación de mandato es de los ciudadanos, es para los ciudadanos y de ninguna manera deber ser solicitado por el presidente o partido político, senadores, diputados. Es exclusivo de los ciudadanos. Si atendemos este punto, ningún partido debió promover la recolección de firmas ni el ir a votar porque se desnaturaliza la revocación de mandato”, agrega Burgoa.

Semanas antes de que se instalen 57 mil 500 casillas en el país (57 mil 200 básicas y 300 especiales) el presidente de la república se ha volcado en la promoción de la revocación de mandato. “Lo que quiero es que la gente participe, que los ciudadanos tengamos siempre un papel protagónico en la vida pública y que participemos en la consulta de revocación del mandato”, es una de las formas en que ha defendido la promoción de la consulta ciudadana del segundo domingo de abril.

Pero también lo han hecho militantes y di-



rigentes de Morena, funcionarios, gobernadores y alcaldes se han sumado a la promoción de la consulta de revocación de mandato.

De acuerdo con algunas encuestas como la de *El Financiero*, el 63 por ciento de la población votaría a favor de que López Obrador se mantenga en el cargo hasta octubre de 2024.

Los expertos consultados sostienen que el espíritu de la consulta de revocación de mandato se ha revertido al promoverla como una ratificación, lo cual es absolutamente innecesario porque el artículo 83 de la Constitución establece que el presidente de México durará en el cargo seis años.

Para que el resultado de la revocación de mandato sea vinculante, tendrá que contar con la participación del 40 por ciento de los mexicanos que están inscritos en lista nominal de electores de 92 millones 823, mil 216), lo que corresponde a 37 millones de electores.

López Obrador ha dicho que aunque no se cumpla con ese porcentaje, si la mayoría de quienes votan lo hacen porque deje el cargo, lo hará.

Los especialistas consultados prevén que es complicado que más de 11 millones de mexicanos (cifra de firmas que se reunieron para solicitar la consulta) salgan a votar el 10 de abril.

“La intención es política. El objetivo de la revocación de mandato es darle un nuevo brío de legitimidad al presidente, que goza del apoyo ciudadano y que sigue siendo un presidente fuerte”, sostiene Arturo Espinosa.

Lo peor es que a pesar de que se trata de un ejercicio democrático a realizarse en las 32 entidades del país, el presupuesto del Instituto Nacional Electoral tuvo un recorte enorme para el ejercicio 2022.

Para disminuir el costo de la revocación de mandato, el INE en lugar de los 3 mil 830 millones de pesos iniciales, determinó que podría organizarse con 3 mil 306 millones. También ha hecho recortes en su presupuesto para poder destinar mil 568 millones de su gasto original a la revocación, pero aún son necesarios mil 738.9 millones de pesos. El recorte al presupuesto de este año fue cuantioso.

El INE, en caso de que aún se requiriesen recursos, podría solicitar una ampliación a la

Secretaría de Hacienda. Una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ordena realizar la consulta con el presupuesto que tenga y en caso de requerir más “la SHCP tiene la obligación de responder a la brevedad, motivada y fundadamente para garantizar la participación ciudadana en el proceso”. Pero más presupuesto no llega.

Esta situación en la que se encuentra el INE ha sido provocada desde el gobierno por una doble vía: primero, siendo el propio presidente y su movimiento los que han solicitado la activación del proceso de revocación, siendo que no fue diseñado como un instrumento para confirmar la popularidad de alguien, sino para retirar del puesto a un político; y segundo, con las obligaciones legales que le impusieron para llevar a cabo dichas elecciones.

El hecho de que la revocación de mandato tenga que realizarse exactamente con el mismo número de casillas que se instalaron en la elección presidencial previa no es una invención del INE, sino que se trata de una obligación que le impusieron diputados, senadores y el gobierno federal. El artículo 41 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, aprobada en septiembre de 2021, dice que “el Instituto deberá habilitar la misma cantidad de las casillas que fueron determinadas para la jornada del proceso electoral anterior, teniendo en cuenta la actualización que corresponda al listado nominal”.

Este mandato legal es sumamente importante, pues el ejercicio de votación para una posible revocación debe darse en las mismas condiciones en que se eligió el presidente de la República, para poder garantizar que el resultado de la revocación pueda sustituir al de la elección presidencial.

Mentiras para negar presupuesto al INE

En un amplio artículo firmado por Leonardo Núñez, de la asociación Mexicanos Unidos contra la Corrupción, éste afirma que el presidente de la República miente cuando dice que no hay manera de otorgar mayor presupuesto al INE.

Una de las máximas de análisis del gasto público es que cualquier prioridad del gobier-

no, sin presupuesto suficiente, en realidad no es una prioridad, sino sólo una declaración de buenas intenciones. En el caso del discurso gubernamental de la transformación del régimen para abrir el camino al uso regular de la democracia participativa directa, particularmente en la revocación de mandato, la falta de recursos para que las votaciones se realicen con la seriedad y calidad necesarias evidencia una contradicción entre los dichos y los hechos, refiere.

Las continuas declaraciones de que no hay margen presupuestario para darle más recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) son falsas, insistió.

“El primer elemento a destacar es algo que ya se ha escrito en múltiples ocasiones, pero es necesario recordar: todos los días el Gobierno Federal modifica el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y reorienta el gasto aprobado por la Cámara de Diputados para llevarlo a sus prioridades sin tener que consultarlo con nadie a través de las adecuaciones presupuestarias”, señaló.

En 2019, de los 4.36 billones de pesos que tenía el Poder Ejecutivo en el PEF, se tomaron 753 mil 539 millones de pesos, equivalente al 17.3 de su presupuesto y fueron reorientados a otro destino diferente del que originalmente estaba estipulado. En 2020 esa cifra ascendió a 785 mil 585 millones de pesos, equivalente al 17.4 del presupuesto del Poder Ejecutivo.

“Para tener una idea de las dimensiones de estos cambios, los ajustes de 2019 fueron equivalentes a 49 veces el presupuesto total del INE ese año de 15 mil 363 millones de pesos o a seis veces el tamaño de toda la Secretaría de Salud (124 mil 266 millones)”, ejemplificó.

Concluye con la afirmación que cuando se ha tratado de alguna de las prioridades del presidente de la república, “sea grande o sea chica, la reorientación del gasto las ha beneficiado. Por ejemplo, en 2020 la Guardia Nacional tenía 3 mil 842 millones de pesos aprobados en el PEF, pero a lo largo del año el presidente decidió darle 16 mil 69 millones de pesos más de lo que originalmente le había asignado la Cámara de Diputados, un aumento de 418 por ciento en su presupuesto”.

Democracia participativa

El concepto democracia participativa hace referencia al conjunto de espacios y mecanismos donde ciudadanas y ciudadanos pueden incidir y decidir sobre asuntos públicos de su incumbencia, más allá de la actividad propia de los representantes.

José Del Tronco Paganelli*

El adjetivo “participativa” aplicado al sustantivo “democracia”, supone que la participación ciudadana en procesos decisorios no es una condición necesaria ni suficiente de la existencia de un régimen democrático. No obstante, en presencia de regímenes democráticos – caracterizados por gobiernos electos a través del sufragio universal, libre, secreto e igualitario a través de procesos electorales recurrentes e íntegros–, el atributo de la participación ciudadana supone una menor distancia entre el gobierno de los representantes y las preferencias de quienes los seleccionan para hablar y tomar decisiones en su nombre.

Para Bovero, hay dos formas de entender la democracia como poder (*krátos*) del pueblo (*demos*). En clave representativa, la democracia supone el gobierno de los más capacitados que toman decisiones en nombre de la nación. Sin embargo, una segunda acepción entiende a la democracia como el poder de la mayoría. Dicho de otra forma, el gobierno de la clase *no-noble* de la sociedad. La idea moderna de democracia participativa representa una amalgama de ambas concepciones.

La democracia participativa puede hacerse efectiva a través de *mecanismos electorales* o *deliberativos*. Los primeros implican que la ciudadanía acude a las urnas para decidir por opciones de políticas previamente diseñadas y presentadas de manera dicotómica por las autoridades (por ejemplo, “¿Está o no de acuerdo con la despenalización del aborto?”). Por su parte, los espacios deliberativos son diseñados para que ciudadanas, ciudadanos, representantes de actores sociales y autoridades políticas se involucren en procesos de diálogo y escucha activa para decidir entre todos, las mejores respuestas a los problemas públicos. Si bien estos mecanismos pueden ser meramente consultivos (no siempre las decisiones son vinculantes o mandatorias para las autoridades), la acción comunicativa “habermasiana” es un componente fundamental de estos espacios, que está ausente en el caso de los mecanismos electorales (también conocidos como mecanismos de democracia directa: MDD).

La idea que postula esta propuesta es que

la democracia participativa –específicamente cuando adquiere el formato deliberativo– implica un salto de calidad (y complejidad, ciertamente) para el funcionamiento del régimen democrático; supone pensar y vivir la democracia en tercera dimensión (D3D). Si bien la realidad tridimensional es más difícil de concebir mentalmente, convivimos con ella todo el tiempo. Tal como lo postuló Condorcet, un régimen político con mayor cantidad de espacios de participación e interacción social, será también más representativo, y más satisfactorio para la ciudadanía.

La democracia en 3D

Una concepción *unidimensional* implica pensar al régimen democrático como aquel conjunto de instituciones que garantizan la participación ciudadana en la elección de sus representantes. Los votos son “piedras de papel”, que resuelven pacíficamente el conflicto político. Przeworski popularizó esta imagen para defender una noción mínima de democracia en la que gobiernos electos por el voto ciudadano se sucedían regularmente en el poder bajo el supuesto de que cualquier alternativa (golpes de estado o procesos de autocratización) era indeseable en el largo plazo, y por tanto irracional. Para Przeworski, las elecciones periódicas y la alternancia de representantes en el poder, son condiciones suficientes para la existencia de regímenes democráticos.

Sin embargo, el abuso de poder existe. Esta constatación llevó a Robert Dahl a imaginar la democracia como una poliarquía. Un régimen político donde diversas instituciones controlan al gobierno, lo someten al escrutinio del debate público, y le exigen cuentas a través de organismos de contraloría, especialmente constituidos con ese fin. Esta concepción de democracia es *bidimensional* (2D): supone, por un lado, una amplia participación ciudadana eligiendo a sus representantes a través de elecciones regulares, y por otro, la existencia de mecanismos de contestación al poder, que impiden su uso abusivo por parte de los gobernantes electos.

Finalmente, la democracia participativa –no sólo a través mecanismos electorales como

los *plebiscitos* o *referéndums*, sino fundamentalmente a través de espacios de consulta, deliberación y decisión como los *presupuestos participativos* o los *foros ciudadanos*– implica pensar a los regímenes democráticos en tercera dimensión (3D). Bajo esta lógica, una mayor calidad democrática requiere de interfaces gobierno-sociedad, donde los procesos de incidencia tengan lugar. Más allá de los espacios institucionales de rendición de cuentas propios del modelo representativo, las interfaces socio-estatales permiten que los ciudadanos sean parte de la historia democrática de una comunidad política. La democracia 3D supone –para la ciudadanía– dejar de asistir al devenir de la historia social como meros espectadores que emitirán su juicio al final de la proyección, y participar de la trama como protagonistas.

Lejos del concepto del “ciudadano total” con que Bobbio designó a los “revolucionarios”, la democracia participativa promueve ciudadanos más atentos, informados, e involucrados en los asuntos públicos que los típicos perfiles desafectos, propios de nuestras sociedades de consumo y opinión. Individuos que quieren, saben y pueden participar en decisiones colectivas sobre temas que afectan sus vidas, sin limitar su esfera privada ni sus intereses particulares.

A modo de cierre...

Valdría la pena preguntarnos entonces, a partir de estas tres concepciones –la democracia como *elecciones* (D1D), la democracia como *poliarquía* (D2D), o la democracia *participativa* (D3D)–, en qué tipo de democracia vivimos y cuál es el modelo que guía nuestras aspiraciones y diseño institucional. Nuestras respuestas dirán mucho acerca de la calidad y complejidad del régimen democrático en que vivimos, y ofrecerán indicios del destino elegido por nuestras autoridades y por nosotros –ciudadanos– como fuentes de legitimidad.

*Publicado originalmente en el portal *Prontuario de la Democracia*, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

Reestructura el PRD Guerrero, sus direcciones municipales en la Costa Chica

Prensa PRD Guerrero

La Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del PRD Guerrero realizó una gira de trabajo en la que visitó los municipios de Marquelia, Cuautepec, Cópala y Florencio Villarreal, con motivo de la integración de las direcciones municipales del Sol Azteca en esta región de la Costa Chica.

El primer encuentro se llevó a cabo en el municipio de Marquelia, donde una representación de la DEE tomó protesta a Rubén García Medina, como dirigente municipal.

Durante su intervención, el presidente del Consejo Estatal, Mario Ruiz Valencia, reconoció: “Esta convocatoria nos hace ver las muestras de compromiso y lealtad que ustedes tienen hacia el PRD”.

Y destacó: “Lo más poderoso que tiene el PRD es su militancia, por lo que es importante sostener encuentros permanentes entre la dirección estatal y la base que realiza trabajos en el territorio”.

En su mensaje, el presidente del PRD en Marquelia, Rubén García Medina, expresó que si bien hay mucho trabajo que hacer en Marquelia, “somos un partido vivo y un partido fuerte”.

El presidente de la DEE del PRD Guerrero, Alberto Catalán Bastida, agradeció la presencia de los asistentes y les pidió que lleven el mensaje de que el PRD sigue trabajando y se encuentra más vivo que nunca, “dando la cara por todas y todos”.

La siguiente reunión correspondió a Cuaute-

pec, municipio gobernado por el alcalde perredista César Iván Perezvargas Ríos, quien, en un efusivo mensaje, enalteció el compromiso de la militancia en este municipio donde, “se ha dado todo por el PRD”.

“Y quiero decirles que todos los compromisos que hicimos, vamos a seguir resolviéndolos como hasta ahora”, afirmó.

Por su parte, la secretaria general del PRD Guerrero, Ivet Díaz Bahena, enfatizó: “Los municipios gobernados por el Sol Azteca son precisamente el rostro del PRD, son nuestra carta de presentación para recuperar la confianza de la gente”.

En este municipio, se tomó protesta como nuevas integrantes de la dirección municipal del PRD a Maribeyda Mendoza y Lizeth Nava.

Catalán Bastida le dijo al alcalde: “Muchas veces los funcionarios del ejecutivo estatal buscan, a través de presiones, obstaculizar el trabajo de quienes pertenecemos a un partido diferente al suyo. Presidente, tú debes seguir adelante en la labor de traer bienestar al pueblo de Cuautepec; y todos sabemos que hasta ahora has hecho un trabajo extraordinario”.

“Aunque pudiera verse como un municipio geográficamente pequeño, es un municipio sumamente importante para nuestro partido; y no tengo duda de que en el 2024, Cuautepec seguirá siendo gobernado por el PRD”, explicó el dirigente.

En el municipio de Copala, la alcaldesa perredista, Guadalupe García Villalva, participó

en la reunión de trabajo encabezada por los dirigentes perredistas, y reconoció el trabajo y compromiso de la dirigencia con la ciudadanía alrededor del territorio estatal.

Al finalizar el encuentro, se acordó regresar en próximas semanas a integrar formalmente la dirección municipal en Copala.

El cierre de la gira fue el municipio de Florencio Villarreal, donde el alcalde Rodrigo Pavón Gallardo dirigió un mensaje de agradecimiento a los asistentes, así como a la dirección estatal por su presencia.

Luego el secretario de Asuntos Electorales, Moisés Acevedo Rodríguez, recordó lo importante que es este municipio para el Sol Azteca, y refirió que el Partido de la Revolución Democrática ha gobernado ya en bastantes ocasiones Florencio Villarreal.

Agregó: “Y estoy muy contento de ver el ánimo que tiene toda nuestra militancia de seguir siendo gobierno en el 2024”.

Posteriormente, Alberto Catalán tomó protesta a Moisés Gallardo Salado, como presidente de la dirección municipal del PRD en este municipio, y a Osiris Romero Ramírez, como secretaria general.

A la gira también asistieron Marco Antonio Organiz, vicepresidente del Consejo Estatal; Jesús Guatemala Aguilar, secretario de Planeación Estratégica y Organización Interna, así como Antonio Orozco Guadarrama, representante del PRD Guerrero ante el IEPCGro.



Designan a Omar González, coordinador de los presidentes municipales del PRD en Guerrero

Llama a sus colegas a asumir el reto de hacer buenos gobiernos; gobiernos honestos, transparentes que rindan cuentas la pueblo. “Nuestro trabajo de hoy servirá para nos aprueben o nos reprueben en la próxima elección del 2024”, anticipó.

El presidente municipal de Igualapa, Omar González Álvarez, llamó a todos los presidentes municipales de la entidad emanados del PRD a construir la unidad, la fraternidad y la armonía dentro de su partido.

Al rendir protesta como coordinador de los presidentes municipales perredistas de Guerrero, González Álvarez recalcó: “Si estamos unidos los veinte (presidentes municipales perredistas), seremos más fuertes. Si estamos unidos, los gobiernos estatal y federal nos escucharán. Si alguno de nosotros tiene un problema, seamos solidarios, vayamos a apoyar. Apoyémonos”.

Frente a la dirigencia estatal y los alcaldes perredistas, agregó: “No es lo mismo que vean a un alcalde quejarse, que a los veinte juntos”.

Omar González fue nombrado coordinador de los presidentes municipales perredistas de la entidad, en una reunión organizada ex profeso el 11 de febrero del año en curso en la capital de la entidad, Chilpancingo.

En el acto, la dirigencia estatal en pleno, encabezada por el presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal del PRD en Guerrero, Alberto Catalán Bastida,

organizó la elección a mano alzada en la que solo votaron los presidentes municipales.

Tras rendir protesta, el alcalde de Igualapa insistió en su llamado a la unidad y exhortó a sus diecinueve compañeros ediles a ser leales al PRD, “el partido que nos dio la oportunidad de servir a nuestros pueblos”.

Reconoció que el PRD no vive sus mejores momentos, pero aun así resaltó: “Nuestros compañeros y compañeras hicieron mil cosas para que nosotros llegáramos a la urna, y ganamos veinte de ochenta”.

Y valoró: “Ese solo hecho ya es un privilegio”.

Omar González se dio tiempo para llamar a sus colegas a asumir el reto de hacer buenos gobiernos; gobiernos honestos, transparentes que rindan cuentas la pueblo.

“Nuestro trabajo de hoy servirá para nos aprueben o nos reprueben en la próxima elección del 2024”, anticipó.

A las dirigencias estatal y nacional les dijo: “Asumo esta responsabilidad con mucha humildad y con compromiso”.

Y remató: “Como perredistas, como presidente y como coordinador, tienen en mí un soldado, siempre dispuesto a la batalla con todos ustedes”.



El dirigente estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida, felicita al presidente municipal de Iguala, Omar González Álvarez, luego de que éste rindió protesta como coordinador de los alcaldes perredistas de la entidad.



La dirigencia estatal y los alcaldes del PRD, luego de la toma de protesta del coordinador de los presidentes municipales de Guerrero.

La invasión a Ucrania termina con la Guerra Fría

Rubén Castro

Más de 30 años pasaron tras la caída del Muro de Berlín; más de dos décadas, de que Ucrania se separó de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando el jefe de gobierno de la Rusia que encabezó a la URSS decide, para defender sus fronteras de una posible amenaza de Occidente a pesar de que ya no existen los bloques de países que motivó la guerra fría que duró 40 años, invadir Ucrania.

A la URSS la componían 15 repúblicas en donde, tras la caída del Muro de Berlín que separaba al mundo capitalista del mundo socialista, hubo movimientos de independencia. Estonia, Letonia y Lituania fueron las primeras en separarse. Bielorrusia, Moldavia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán y Ucrania le siguieron. Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán fueron las más recientes.

Aunque se dio la independencia, Rusia siguió siendo la república dominante. Solo Estonia, Letonia y Lituania se alejaron de la órbita de influencia, integrándose tanto a la Unión Europea como a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), esta última, concebida en la época de la *guerra fría* que vino tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, como una manera que frenar u oponerse militarmente al bloque que conformó Rusia y la mitad de Europa que aceptó el régimen socialista.

Con la caída del Muro del Berlín y la escisión del bloque socialista, prácticamente terminó la confrontación Este-Oeste. Todos somos capitalistas y ya no hay motivo de pelea. Pero la OTAN no desapareció a pesar de

que sí concluyó el Pacto de Varsovia que unía a la antigua URSS y la mitad de Europa. Sin embargo, la tensión nunca fue igual que antes de la caída del bloque socialista,

En este contexto, el gobierno de Ucrania anunció su intención de integrarse a la OTAN desde mediados del año anterior y eso causó una reacción extrema de Rusia. El pasado 24 de febrero, se dio el anuncio desde el Kremlin de una “operación militar especial” y los primeros bombardeos en Ucrania pusieron al mundo en vilo ante lo que podría ser el mayor conflicto armado en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

La situación ha confrontado a grupos de académicos y políticos de México y América Latina: ante las críticas a la invasión militar, se recuerda que Estados Unidos ha protagonizado decenas de acciones similares, apelando también la defensa del territorio aunque en algunos otros casos, la protección a las empresas e inversiones de sus ciudadanos. Una actitud imperialista, como la del presidente de Rusia.

Historia de sobresaltos

Después de pertenecer a la Unión Soviética desde 1922, Ucrania se convirtió en una nación independiente tras la desintegración de la URSS (1991). No obstante, su anexión a distintas potencias desde su fundación provocó una serie de fracturas cuyo resultado es una población heterogénea que en términos prácticos y para una mejor comprensión del conflicto contemporáneo, puede dividirse en dos:

Mientras que las provincias del Este mantienen una mayor afinidad histórica con el go-

bierno, idioma y la religión ortodoxa rusa, en el Oeste de Ucrania existe una fuerte tendencia nacionalista caracterizada por una creciente valoración del idioma y un acercamiento cada vez mayor con Occidente y el resto de Europa.

El sentir nacionalista de Kiev y el oeste de Ucrania alcanzó uno de sus puntos candentes en las multitudinarias manifestaciones conocidas popularmente como Euromaidán, un movimiento que nació a finales de 2013 y convocó a cientos de miles de ucranianos a salir a las calles y manifestarse contra el gobierno prorruso del presidente Víktor Yanukóvich.

Tras meses de protestas luego de que el país se retirara de los acuerdos que le unirían política y económicamente con la Unión Europea, la presión social provocó la destitución de Yanukóvich, mientras los movimientos contrarrevolucionarios cobraban fuerza en Crimea, Donetsk y Lugansk.

En 2014, meses después de las manifestaciones del Euromaidán que exigían al gobierno en turno continuar con los acuerdos de adhesión y de libre comercio con la Unión Europea, Rusia lanzó una intervención militar a la península de Crimea, un territorio que pertenecía a Ucrania desde 1954 bajo la figura de República Autónoma, con el pretexto de salvaguardar a los habitantes prorrusos de Crimea.

Con la ocupación militar tomando los principales edificios de gobierno, en marzo de 2014 se llevó a cabo un referéndum por parte de las autoridades afines a Rusia en el que se decidió la anexión de Crimea a la Federación Rusa.



Como respuesta, el gobierno de Ucrania junto con la OTAN y la Asamblea General de Naciones Unidas han tildado de ilegal la anexión desde entonces y exigido a Rusia poner fin a la ocupación de Crimea; no obstante, el ejército ruso ha mantenido presencia permanente en la región, misma que ha crecido en los últimos meses junto con la movilización de más de 120 mil efectivos en distintos frentes en la frontera con Ucrania.

El lunes 21 de febrero de 2022, Rusia dio el siguiente paso en las hostilidades al reconocer la independencia y soberanía de Donetsk y Lugansk como repúblicas populares. Se trata de un par de territorios de la región del Donbás (al Este de Ucrania) con afinidad prorrusa que han sido el epicentro de un conflicto armado que enfrenta a grupos independentistas prorrusos contra el gobierno ucraniano desde abril de 2014 y ha cobrado más de 14 mil víctimas mortales desde entonces.

Los grupos prorrusos aparecieron tanto en Donetsk como en Lugansk en 2014 como un movimiento reaccionario a las manifestaciones europeístas del Euromaidán tras el derrocamiento del presidente prorruso Víktor Yanukóvich y se levantaron en armas para proclamar ambos territorios como repúblicas

populares ante la resistencia ucraniana.

Con el reconocimiento de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, Rusia se retira definitivamente del Protocolo de Minsk, un acuerdo de doce puntos que tenía como objetivo poner un alto al fuego a la Guerra del Donbás y dotar de cierta autonomía a la región.

Tras una semana en la que resalta el recrudecimiento de la Guerra del Donbás, con ambos bandos culpándose de la intensificación de los bombardeos, la mañana del 24 de febrero de 2022, Vladimir Putin anunció la ofensiva militar que inaugura la guerra entre Ucrania y Rusia: una “operación militar especial” que tiene como objetivo “defender a las personas que durante ocho años han sufrido persecuciones y genocidio por parte del régimen de Kiev”, a través de lo que llamó “la desmilitarización y desnazificación de Ucrania”.

Horas después, las alertas de bombardeos se activaron en Kiev y aparecieron las primeras imágenes de explosiones en la capital y otras ciudades como Járkov, Odessa y Mariupol, mientras guardias fronterizos alertaban de la entrada de tropas rusas al país de forma simultánea.

El homólogo ucraniano de Putin, el presi-

dente Volodimir Zelenski, llamó al mundo a “crear una coalición anti-Putin para obligar a Rusia a la paz”, una solicitud que de ser respondida por Estados Unidos y otros miembros de la OTAN, podría poner en marcha un escenario bélico de magnitudes inéditas desde 1945, cuando la Alemania nazi aceptó su rendición y la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin. No ha ocurrido; los aliados europeos temen respuestas de enorme capacidad destructiva y optan por intentar asfixiar al invasor con sanciones económicas. También mandan arsenal pero no combatientes.

La Organización de las Naciones Unidas intervino de tibia manera; llamó a las partes en conflicto a la mesa de negociación. Rusia insiste en que Ucrania debe declararse neutral y desistir de la intención de ser miembro de la OTAN, porque no aceptará que el enemigo de Occidente instale armas junto a sus fronteras. El gobernante del país invadido acepta negociar ante la falta de apoyo de sus aliados.

Las consecuencias ya se han dejado sentir, con el aumento de los precios de alimentos, algunos metales y combustibles; de persistir varios meses esa situación, hará difícil la recuperación económica y salir de la crisis que trajo la pandemia de Covid-19.

Viene de la página 16

para resolver varias exigencias gremiales como el pago de bonos de fin de año, la reactivación de la comisión de escalafón y la permanencia, en donde están asignados, de los trabajadores comisionados. Por eso es que ya no pedirían la remoción de la secretaria de Salud.

Los problemas persiguen a la primera mujer gobernadora de Guerrero, porque el pasado 2 de diciembre, cuando apenas tenía en el cargo escaso mes y medio, la gobernadora acudió ante el grupo de manifestantes universitarios que protagonizaban una protesta en el corazón de la zona turística de Acapulco.

Según un puntual comunicado oficial fechado el 2 de diciembre de 2021, se da cuenta: “Como resultado de un diálogo cercano y sensible encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda con los integrantes del Movimiento Estudiantil Kiosco, se acordó el retiro de manera pacífica del plantón que mantenían desde hace casi tres meses en la Glorieta de la Diana sobre la Costera Miguel Alemán”.

La protesta, porque no alcanzaron cupo en la escuela de Medicina y querían un espacio. De 38 inconformes, a 15 los reubicaron en otras escuelas universitarias, a seis los remitieron a la Universidad Benito Juárez y a los cinco restantes, se les consiguió becas para universidades privadas.

Las movilizaciones sociales que se atraviesan al paso, sin embargo, son desde antes de asumir el cargo. Un mes antes del fin de periodo de Héctor Astudillo Flores surgieron protestas de policías, bomberos, médicos y la generalidad de empleados públicos que exigieron pago de prestaciones diversas, incluyendo bono sexenal, así como de jubilados a los que se retrasaron los pagos o llegaban a la mitad. Salgado Pineda envió a representantes plenipotenciarios como el senador Félix Salgado Macedonio a pedir paz, prometiendo solución luego del 15 de octubre de 2021, día del cambio de estafeta gubernamental.

Subsecretaría de premio

Integrantes de la CETEG retiraron el plantón que por dos semanas mantuvieron frente a la sede del Poder Ejecutivo tras la respuesta satisfactoria a sus principales demandas, que fueron

enarboladas desde antes del inicio del gobierno morenista de Salgado Pineda.

La protesta fue convocada justo cuando la Secretaría de Educación Pública convocaba de manera general a regresar a las aulas, luego de dos años de cierre por causa de la pandemia de covid-19. Fue medida de presión porque a poco más de cinco meses de iniciado el gobierno que encabeza Salgado Pineda, ninguna posición o cargo había otorgado al magisterio disidente de Guerrero, a pesar de que se trata de un gobierno afín.

Los cetegistas iniciaron su movilización el lunes 14 de marzo con un bloqueo de 12 horas a la autopista del Sol y a pesar de la afectación descomunal que se generó, la gobernadora no quiso atender a la dirigencia.

El martes 15, los maestros trasladaron su movimiento a la sede del Poder Ejecutivo donde instalaron un plantón; además, tomaron el edificio Juan Álvarez, ubicado en el centro de la capital guerrerense, Chilpancingo. La gobernadora ahora sí llegó con los manifestantes, a las once horas, hasta el inmueble que alberga a las oficinas de Registro Civil y otras dependencias estatales más. El arribo de la gobernadora a la protesta, causó extrañeza a pesar que los maestros, desde el inicio de la protesta el lunes 14, exigieron que fuera la mandataria a dialogar con ellos, puesto que el secretario estatal de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, carecía de capacidad para solucionar la serie de demandas inscritas en un voluminoso pliego petitorio.

El miércoles 16, se realizaron mesas de trabajo en la Ciudad de México, y ante un retraso en la instalación de la mesa de negociación en Chilpancingo, los disidentes volvieron a bloquear la carretera concesionada durante 15 minutos, luego se regresaron a su campamento.

En las primeras mesas de diálogo se lograron avances como el que la gobernadora solicitará una auditoría integral al Plan de Previsión Social y con ello se podrá determinar cuántos recursos financieros acumulados debe tener este programa y saber quién los ha desviado.

En las minutas que se firmaron también se estableció el compromiso de que se reconozca el modelo Alternativo Educativo Guerrerenses, que se ha trabajado desde el 2013, desde que

se pretendió imponer la reforma educativa de Enrique Peña Nieto.

Lo mejor es que se crea, se pone en operación la Subsecretaría de los Pueblos Originarios y Afromexicanos dentro de la estructura de la Secretaría de Educación de Guerrero, con el argumento de “dar la atención que requiere” la educación indígena. Estará a cargo de un maestro cetegista. Otros compromisos del gobierno estatal es abrir 21 escuelas cerradas y la solución de diversos asuntos laborales.

En conferencia de prensa el sábado 26, el dirigente Héctor Torres Solano informó que la creación de la Subsecretaría de los Pueblos Originarios y Afromexicanos es una vieja demanda de la CETEG, porque con ello se permitirá proteger las lenguas originarias y dar una atención más oportuna a las demandas de



ese sector del magisterio.

El líder del magisterio disidente ofreció una disculpa a la sociedad civil por las molestias que ocasionaron con su protesta, pero eso fue por la falta de respuesta al pliego petitorio que en diciembre del año pasado entregaron al gobierno del estado. También con los periodistas por las agresiones a dos reporteros en una de las últimas movilizaciones, con el compromiso de evitar que se repitan.

Otro de los acuerdos fue el compromiso de la SEG de abrir 21 escuelas que están cerradas por falta de maestros, de las cuales nueve abrirán sus puertas de inmediato y el resto en el transcurso de la cuarta semana del mes de abril.

El secretario general de la CETEG dijo que por seguridad del movimiento magisterial, no daría a conocer todos los acuerdos y com-

promisos establecidos en cuatro minutas con el gobierno estatal, pero que también lo hace para que los logros no sean adjudicados “por los charros” de la Sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el sindicato oficial, que calificó como un sindicato sumiso y de rodillas ante la parte patronal.

¿Por qué ese rechazo al sindicato que está reconocido por las autoridades y que tiene a la mayor parte de trabajadores de la educación inscritos en sus filas? El dirigente disidente culpó a “los charros del SNTE” de la bancarrota en que se encuentra el Plan de Previsión Social (PPS) y de la pérdida de muchos derechos laborales de los trabajadores de la educación. Por esa culpa de omisión es que la CETEG solicitó una auditoría al PPS.

Advirtió que si el gobierno del estado y la

Secretaría de Educación Guerrero incumplen los compromisos y acuerdos plasmados en las minutas, recurrirán de nueva cuenta a la movilización y otras acciones de protesta que acuerden los agremiados.

Torres Solano aclaró que a la CETEG no le interesa quién esté al frente de la Secretaría de Educación Guerrero, sólo pide que haya atención a las demandas presentadas de manera formal, entre las que están pendientes, 90 días de aguinaldo.

Antes de retirarse de las escaleras que llevan a palacio de gobierno, recalcó que el 4 de abril realizarán una marcha en la Ciudad de México para entregarle a la SEP un paquete de documentos que buscan solucionar muchos problemas que generaron al magisterio las leyes aprobadas en gobiernos recientes.





Magisterio disidente impone condiciones a la gobernadora Evelyn Salgado

Rubén Castro

Viernes 25 de marzo. Los agremiados a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero retiran el plantón de palacio de gobierno, en donde estuvieron dos semanas. Tuvo que atenderlos la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, ya que no aceptaron otro interlocutor. Eso ha caracterizado la administración estatal: la encargada del Poder Ejecutivo, a falta de equipo, tiene que andar resolviendo los diversos problemas que se presentan en distintos ámbitos, o al menos, simula resolverlos.

Por si fuera poco, hay nula obra de gobierno y de obra pública, por un lado, y por otro, sin algún proyecto de desarrollo definido para las siete regiones de la entidad o alguna en específico.

Ese mismo viernes del fin de la protesta de los maestros disidentes, la gobernadora tuvo que detener su trayecto de Chilpancingo a Acapulco, donde inauguraría la convención bancaria que anualmente se realiza, para atender a los integrantes de la Unión de Normales del Estado de Guerrero que se dirigían a bloquear la entrada a la autopista, a la altura del Parador del Marqués, donde se unen la vía concesiona-

da y la carretera libre, para exigir computadoras, material didáctico y mejora de las instalaciones escolares.

Salgado Pineda también intervino para que los agremiados a la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud desistieran de parar labores como amenazaron hacerlo el jueves 18 de marzo —cuando tenía tres días de iniciado el paro de los cetegistas—, con la demanda del cese de Aidé Ibáñez Castro. La dirigente Beatriz Núñez Vélez informaría al respecto que hubo buena voluntad de autoridades estatales, sin mencionar nombres,

Pase a la página 14